

gado del Estado, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha nueve de diciembre de mil novecientos setenta y seis, dictada, enalzada, contra otra del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Madrid de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, sobre denegación de suspensión de la ejecución de los actos administrativos a que la demanda se refiere; debemos declarar y declaramos ser conformes a derecho ambas resoluciones impugnadas; todo ello sin hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas del actual proceso jurisdiccional.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 28 de febrero de 1979.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

8987

ORDEN de 28 de febrero de 1979 por la que se dispone la ejecución en sus propios términos de la sentencia dictada en 11 de febrero de 1978, por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 945 de 1975.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 11 de febrero de 1978, por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 945 de 1975, interpuesto por el Ayuntamiento de Selas (Guadalajara) contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 2 de octubre de 1975, en relación con la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, cuota proporcional;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Selas contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de dos de octubre de mil novecientos setenta y cinco, confirmatorio de otro anterior del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Guadalajara de treinta de abril de mil novecientos setenta y cinco, recaída en la reclamación número seis/mil novecientos setenta y cinco, que a su vez había confirmado la liquidación girada a dicho Ayuntamiento por la cuota proporcional de la Contribución Territorial Rústica, ejercicio de mil novecientos setenta, por la explotación de los montes públicos números ciento ochenta y nueve y ciento noventa y uno, debemos de anular y anulamos la sanción de ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesetas impuesta a dicho Ayuntamiento en dicha liquidación, por no ser conforme con el ordenamiento jurídico, confirmando los demás extremos impugnados por ser ajustados a derecho; sin hacer expresa condena en costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 28 de febrero de 1979.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

8988

ORDEN de 28 de febrero de 1979 por la que se dispone la ejecución en sus propios términos de la sentencia dictada en 9 de octubre de 1978, por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1.089 de 1975.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 9 de octubre de 1978, por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1.089 de 1975, interpuesto por el Ayuntamiento de Taravilla (Guadalajara), contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 30 de octubre de 1975, en relación con la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, cuota proporcional;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso interpuesto por el Procurador don Alejandro García Yuste, en nombre y represen-

tación del Ayuntamiento de Taravilla, frente a la Administración General del Estado, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha treinta de octubre de mil novecientos setenta y cinco, dictada en alzada, confirmando otra del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Guadalajara de treinta de abril de mil novecientos setenta y cinco, que a su vez confirmaba la liquidación de la Contribución Territorial Rústica, por cuota proporcional, ejercicio mil novecientos setenta y uno, a los que la demanda se contrae; debemos declarar y declaramos ser conformes a derecho las resoluciones y liquidación referidas e impugnadas; todo ello sin hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccional.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 28 de febrero de 1979.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

8989

RESOLUCION de la Dirección General del Tesoro por la que se amplía la autorización número 24 concedida al Banco Comercial Español para la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tributos en los establecimientos que se citan.

Visto el escrito formulado por el Banco Comercial Español, solicitando autorización para ampliar el servicio de cuentas restringidas de recaudación de tributos,

Esta Dirección General acuerda que la autorización número 24, concedida el 7 de octubre de 1964 a la citada Entidad, se considere ampliada en los siguientes establecimientos:

Demarcación de Hacienda de Valencia

Valencia, sucursal en avenida Ramiro Ledesma, 8, a la que se asigna el número de identificación 46-53-04.

Játiva, sucursal en República Argentina, 10, a la que se asigna el número de identificación 46-53-05.

Alcira, sucursal en plaza del Reino, 11, a la que se asigna el número de identificación 46-53-06.

Madrid, 2 de marzo de 1979.—El Director general, Miguel Martín Fernández.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

8990

ORDEN de 18 de febrero de 1979 por la que se nombra la Comisión Gestora de la Universidad de Alcalá de Henares.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito formulado con fecha 25 de enero último por el Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Alcalá de Henares, nombrado por Orden ministerial de 15 de noviembre de 1978, en el que propone la composición de la nueva Comisión Gestora de dicha Universidad,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.º, 2, del Real Decreto 1502/1977, de 10 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 30), ha tenido a bien nombrar la Comisión Gestora de la Universidad de Alcalá de Henares, desvinculada de la Universidad Complutense de Madrid, por Orden ministerial de 28 de agosto de 1978, que quedará integrado del siguiente modo:

Vicepresidente: Ilustrísimo señor Decano de la Facultad de Ciencias, como más antiguo.

Vocales:

Ilustrísimo señor Decano de la Facultad de Filosofía y Letras.

Ilustrísimo señor Decano de la Facultad de Derecho.

Ilustrísimo señor Decano de la Facultad de Medicina.

Ilustrísimo señor Decano de la Facultad de Farmacia.

Ilustrísimo señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Ilustrísimo señor Alcalde de Alcalá de Henares.

Ilustrísimo señor Alcalde de Guadalajara.

Ilustrísimo señor Presidente de la Sociedad de Condueños.

Ilustrísimo señor Director del Instituto de Ciencias de la Educación (I. C. E.).

Ilustrísimo señor Presidente de la Comisión Económico-Administrativa, don Juan Llovet Verdugo.

Secretario general: Ilustrísimo señor don Alberto Pérez de Vargas Luque.

Gerente: Ilustrísimo señor don Fernando Santiso Diéguez.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 16 de febrero de 1979.—P. D., el Subsecretario, Miguel Angel Sánchez-Terán Hernández.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

8991

ORDEN de 27 de febrero de 1979 por la que se crea el Departamento de «Botánica» en la Facultad de Biología de León, dependiente de la Universidad de Oviedo.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta de creación del Departamento de «Botánica», elevada por el Decanato de la Facultad de Biología de León, dependiente de la Universidad de Oviedo;

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1975/1973, de 26 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 22 de agosto), Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Auto:izar la creación del Departamento de «Botánica» en la Facultad de Biología de León, dependiente de la Universidad de Oviedo.

Segundo.—Por la Dirección General de Universidades se dictarán las medidas pertinentes para el cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en la presente Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 27 de febrero de 1979.—P. D., el Subsecretario, Miguel Angel Sánchez-Terán Hernández.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

8992

RESOLUCION de la Dirección General de Universidades por la que se adjudica una beca para la Formación de Personal Investigador.

Como continuación de la Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se adjudicaban becas para la Formación de Personal Investigador,

De conformidad con lo dispuesto en la Orden ministerial de 11 de octubre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre) por la que se autorizaba a la Dirección General de Universidades a convocar becas de Formación de Personal Investigador,

Esta Dirección General, vista la propuesta de adjudicación elevada por la Comisión de Investigación del Distrito Universitario correspondiente, ha resuelto:

1.º Otorgar la siguiente beca destinada a Formación de Investigadores en España y que a continuación se relaciona.

Universidad de Alcalá de Henares

Cuerda Riezu, Antonio Rafael.

2.º Esta beca será compatible con la situación de Profesor ayudante con dedicación normal o plena y con la de Profesor encargado de curso a nivel A o B. Otras compatibilidades deberán ser solicitadas a la Dirección General de Universidades. La cuantía de las anteriores ayudas ascenderá a la cantidad de 22.000 pesetas mensuales.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S.

Madrid, 10 de enero de 1979.—El Director general, Manuel Cobo del Rosal.

Sr. Jefe del Servicio de Promoción de la Investigación Universitaria.

MINISTERIO DE TRABAJO

8993

ORDEN de 31 de enero de 1979 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Transportes Fruteros Canarios, S. A.» (FRUCASA), y seguido ante la Audiencia Nacional.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme, en 5 de diciembre de 1978, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Transportes Fruteros Canarios, Sociedad Anónima» (FRUCASA), y seguido ante la Audiencia Nacional,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que desestimamos la causa de inadmisibilidad opuesta por la Abogacía del Estado y estimamos el recurso interpuesto por «Transportes Fruteros Canarios, S. A.», anulando, por no ser conforme a derecho, la resolución del Ministerio de Trabajo de veintiocho de junio de mil novecientos setenta y seis, debiendo reintegrarse a la recurrente la suma depositada para recurrir en vía administrativa; sin expreso pronunciamiento sobre costas.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Fernando de Mateo, Ramón Guerra, José María Ruiz-Jarabo, Federico Sainz de Robles y Diego Rosas (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 31 de enero de 1979.—P. D., el Subsecretario, Gerardo Harguindey Banet.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

8994

ORDEN de 2 de febrero de 1979 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por don Julián Ramón Santillana Garrastazu y seguido ante el Tribunal Supremo.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme, en 21 de junio de 1978, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por don Julián Ramón Santillana Garrastazu y seguido ante el Tribunal Supremo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que desestimando, como desestimamos, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Samuel Martínez de Lecea y Ruiz, que actúa en nombre y representación de don Julián Ramón Santillana Garrastazu, contra la resolución del Ministerio de Trabajo de veinte de agosto de mil novecientos setenta y uno, por la que se confirma el acto sancionador de la Dirección General de Trabajo de nueve de febrero del mismo año, por la cual se imponen veintiocho sanciones de cinco mil pesetas, con un total de ciento cuarenta mil pesetas, debemos declarar y declaramos, absolviendo como absolvemos a la Administración de cuantas pretensiones han sido contra ella actuadas, que los mencionados actos son conformes a derecho; no se hace especial declaración de condena respecto de las costas y tasas judiciales causadas en este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Pedro Martín de Hijas, Manuel Gordillo, Angel Martín del Burgo, José Ignacio Jiménez y José Gabaldón (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 2 de febrero de 1979.—P. D., el Subsecretario, Gerardo Harguindey Banet.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

8995

ORDEN de 7 de febrero de 1979 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Pedro Lorca Marín e Hijos, S. L.», y seguido ante el Tribunal Supremo.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 11 de julio de 1978, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Pedro Lorca Marín e Hijos, Sociedad Limitada», y seguido ante el Tribunal Supremo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos inadmisibles el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de «Pedro Lorca Marín e Hijos, S. L.», domiciliada en Madrid, contra la Orden del Ministerio de Trabajo de treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y dos, sobre Reglamentación Nacional de Trabajo para las Empresas de Contratas Ferroviarias; sin hacer expresa imposición de costas en las actuaciones.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla-